

EXPOTACIÓN MINERA Y GRUPOS ARMADOS EN AL ARCO MINERO DEL ORINOCO

En los últimos años, diversas fuentes dentro de Venezuela han informado de un aumento de violencia e inseguridad en la región fronteriza denominada el Arco Minero del Orinoco (AMO). Las fuentes sugieren que distintos actores armados, de los cuales se destacan el ELN, grupos disidentes de las FARC y organizaciones criminales venezolanas conocidas como "sindicatos", compiten por el control de las actividades mineras en la región del Arco. Este análisis examina las dinámicas de los grupos armados en la zona del AMO.

Puntos clave

- La crisis económica y las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro lo han impulsado a buscar nuevas fuentes de ingresos. El AMO, aunque comenzó en 2016 como un proyecto de desarrollo oficial, parece haberse convertido en fuente de criminalidad e inseguridad.
- La competencia entre los actores armados por el control de las operaciones mineras ha implicado enfrentamientos violentos, mientras que la presencia de los grupos en las fronteras (con Guyana, Brasil y Colombia) ha generado conflictos con las comunidades locales. En los últimos años, las tasas de homicidios en la región han sido entre las más altas del país.

Contexto

Con la creación del AMO en febrero de 2016¹, el gobierno venezolano buscó aprovechar el alza estable del precio del oro para generar ingresos en un contexto creciente de parálisis económico provocado por la crisis interna y las sanciones estadounidenses. También su propósito era la regularización de las actividades mineras en la región del Bolívar, donde la minería informal ha prevalecido históricamente, mediante alianzas con



¹ Establecido por el decreto ejecutivo n°2248 del 24 febrero de 2016.

una gran variedad de empresas internacionales del sector extractivo². Sin embargo, no se lograron concretar dichos acuerdos y hasta este momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre la ejecución de este proyecto estatal. La evidencia sugiere que los distintos grupos armados, ya presentes en la zona, han tomado el control de las actividades mineras rápidamente después de su inicio.

Dinámicas de los grupos armados en el Arco Minero

El AMO ha experimentado una expansión continua³, donde distintos grupos armados [compiten](#) por el control de las minas. La producción del oro permanece el eje central, pero se extrae también otros [minerales preciosos](#) como el diamante, el coltán y la bauxita.

Desde su puesta en marcha en 2016, el gobierno de Nicolás Maduro no ha brindado información alguna sobre las empresas que operan en el Arco, la cantidad de oro producido y exportado, ni la ejecución global del proyecto. Sin embargo, los testimonios locales indican que son aquellas organizaciones criminales llamadas "sindicatos" que [administran](#) la mayoría de las minas en el Bolívar. La evidencia sugiere que estas buscan extender sus actividades en las fronteras con Guyana y Brasil, donde se observan a menudo [conflictos](#) con las fuerzas de seguridad y las comunidades indígenas locales.

[Según estudios del International Crisis Group \(ICG\)](#), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que históricamente ha utilizado el territorio de Venezuela como un refugio seguro, ha fortalecido su presencia en el estado de Bolívar, en Amazonas y a lo largo de la frontera con Guyana y Brasil. Mediante la extorsión, la guerrilla ha entrado a manejar distintas vías de transporte claves para el contrabando de minerales y de bienes necesarios para la extracción minera. Las relaciones que los actores armados cultivan entre sí son muy versátiles, y los sindicatos parecen [rivalizar](#) regularmente con el ELN.

Un [análisis](#) del Center for Strategic and International Studies (CSIS) observa que desde 2018, grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han [deslocalizado](#) parte de sus actividades criminales a Venezuela. Estudios de ICG y Human Rights Watch [sugieren](#) similarmente que los grupos disidentes tienen [presencia](#) sobre todo en la frontera colombo-venezolana del Amazonas donde controlan [corredores](#) estratégicos para el tráfico de droga, minerales y gasolina.

Las estructuras criminales han creado una gestión depredadora de los recursos mineros que se basa en la explotación ilícita del AMO. Según los grupos locales, las guerrillas [subcontratan](#) a grupos armados para vigilar a los mineros. Operan a través

² Inicialmente, el gobierno hablaba de negociaciones con 150 empresas internacionales, pero al final, firmó acuerdos con solo cinco empresas extranjeras, según la página web del gobierno Desarrollo Minero.

³ Cuando fue creado en 2016, se declaró que la zona de extracción se limitaría al 12% del estado del Bolívar. Pero varias encuestas basadas en datos de teledetección por satélite afirman que los sitios de extracción han superado ampliamente la zona prevista a tal fin (que según fuentes se hubiera triplicado entre marzo 2019 y 2020). Además, el gobierno ha emitido de manera unilateral una resolución el 7 de abril 2020 legalizando la explotación adicional de 5 ríos que alimentan el Amazonas (publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.526 publicada el miércoles 8 de abril).

del control directo de las minas del Arco, la explotación laboral de los mineros y la extorsión sistemática de las actividades relacionadas con la minería en los pueblos mineros.

Asimismo, los actores armados [se encargan](#) de la seguridad en las minas (por ejemplo, controlan las entradas y salidas), y recurren frecuentemente al uso de la fuerza para hacer respetar sus reglas. Los sindicatos venezolanos basan su estrategia en la [intimidación](#) y sumisión de los habitantes, practicando [castigos corporales](#), palizas y asesinatos selectivos.

Como consecuencia de los enfrentamientos, tanto entre grupos armados como con las fuerzas armadas venezolanas, el estado de Bolívar [registró](#) niveles de inseguridad crecientes desde 2016. En 2018, dos de sus municipios, El Callao y Sifontes, fueron los más violentos del país con tasas respectivas de 620 y 448 asesinatos por cada cien mil habitantes.

Pese al despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el Arco minero [desde 2016](#) no se ha logrado contener la violencia. Al contrario, dicha presencia puede haber generado aún más tensiones ya que los [testimonios](#) locales apuntan hacia el involucramiento de las fuerzas de seguridad venezolanas en las actividades mineras ilícitas, mediante el cobro de impuestos sobre la producción mineral, el contrabando y actividades criminales conexas⁴.

Entonces, la situación en la zona permanece incierta, y los grupos armados ejercen una dominación sobre los asentamientos mineros. Regulan la vida diaria en los pueblos donde [proporcionan](#) materias primas (que proceden muchas veces del contrabando) y mantienen el comercio gracias a la introducción del oro en la economía local. La evidencia sugiere que ofrecen servicios de protección a las comunidades locales contra los grupos rivales, y reclutan jóvenes en las comunidades remotas. También, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han [denunciado](#) el desarrollo en los pueblos mineros de actividades de prostitución y [explotación](#) sexual de las mujeres.

Por otro lado, la expansión de la actividad minera por fuera de la zona del AMO, tal como ha ocurrido en las áreas protegidas (parques naturales, reservas forestales y comunidades indígenas) ha provocado recurrentes violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Además de la contaminación de los ecosistemas del Arco y del Amazonas, el uso del mercurio y otros productos químicos para la extracción, ha impactado directamente la salud de los mineros y residentes de la zona.

Los mineros suelen pagar una serie de impuestos (o "[vacunas](#)") a lo largo de la cadena de producción del oro ilícito. También los residentes de la zona están

⁴ Según un informe de ICG: "Sobre el tema de las alianzas con las fuerzas estatales, entrevistas de Crisis Group entre julio y diciembre de 2018 con mineros, líderes indígenas, periodistas locales, antiguas fuentes de inteligencia, académicos, un excombatiente de las FARC y trabajadores de ONG confirmaron que las fuerzas armadas de Venezuela están profundamente involucradas en economías mineras ilegales y cosechan los beneficios ilícitos de éstas mediante impuestos a la producción mineral, el tráfico de minerales y la extorsión de economías relacionadas, como la prostitución, el transporte de alimentos y de combustibles."

sometidos a impuestos sobre sus actividades económicas por parte de los grupos armados o fuerzas de seguridad.

Se supone que gran parte del oro producido en Venezuela sale del país, pero, dadas las sanciones estadounidenses, y la subsiguiente necesidad de usar rutas menos formales, es difícil dimensionar las cantidades involucradas. Parece que el oro transita por los países fronterizos como Guyana, Brasil, Colombia, incluso Surinam y las islas del Caribe (Aruba y Curazao), para luego ser enviado fuera del continente. Sin embargo, no se conoce el recorrido del oro producido en el Arco, y en la mayoría de ocasiones su destino final⁵.

Análisis

Las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos desde 2017 han ejercido una presión creciente sobre la ya reducida capacidad financiera del gobierno venezolano. Debido a la necesidad de asegurar recursos financieros cada vez más difíciles de conseguir por el régimen de Maduro, es probable que este busque ingresos adicionales derivados de las actividades mineras ilícitas, que irán creciendo y favoreciendo a los grupos armados.

Tampoco se puede descartar el riesgo de daños colaterales a la población, es decir un mayor empobrecimiento y alza de la inseguridad en un contexto que actualmente es muy inestable.

La evidencia sugiere que miles de personas⁶ vinieron a trabajar en los asentamientos mineros del estado de Bolívar en búsqueda de beneficios económicos. Es probable que gran parte de los trabajadores de esta migración interna se hayan vinculado con las actividades mineras organizadas por los grupos armados.

En caso de que el gobierno venezolano no logre retomar el control del espacio y de las actividades minera en el Arco, el riesgo reside en la consolidación de los grupos armados en un territorio en vía de fragmentación y el aumento de las operaciones de contrabando para generar más ingresos.

Si para enfrentar las dificultades derivadas de las sanciones, el gobierno tolera y hasta incentiva el desarrollo de las operaciones ilegales, corre el riesgo de poner en marcha un círculo vicioso de empoderamiento criminal e inseguridad.

Autor: Linon Saldarkhan

⁵ algunos casos han recibido atención mediática específica, como por ejemplo, más de 7 toneladas que llegaron a [Uganda](#). Un informe de [HRW](#) ha citado tres países donde supuestamente se exporta el oro ilícito venezolano: Turquía, Emiratos Arabes Unidos, Suiza.

⁶ Según el ACNUDH, “Debido a la crisis económica y la falta de oportunidades laborales en Venezuela, la migración interna hacia la región minera ha aumentado dramáticamente en los últimos años”.